



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, dieciséis de junio de dos mil veintidós

21-259

Proceso:	APELACIÓN SENTENCIA
Demandante:	CARLOS ARTURO NAVAS LONDOÑO
Demandado:	COLPENSIONES
Radicado No.:	05001-31-05-009-2020-00441-01.
Decisión:	CONFIRMA ABSOLUCIÓN

La Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARÍSTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de primera instancia dentro del proceso de la referencia.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 22, sometió a consideración de los restantes integrantes de la Sala el proyecto aprobado en sala virtual en el **ACTA 018** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

1.1 LO PRETENDIDO

Pretende el demandante que se condene a **COLPENSIONES** para que reconozca y pague la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su padre **JOSÉ SITDALÍ NAVAS VELÁSQUEZ** desde la fecha de fallecimiento de su madre **GLADIS DE JESÚS LONDOÑO PINEDA** quien recibía dicha prestación como beneficiaria, los intereses moratorios, la indexación y las costas y agencias en derecho.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES EXPUSO EN SÍNTESIS LOS SIGUIENTES HECHOS:

- Que es hijo de JOSÉ SITDALÍ NAVAS VELÁSQUEZ y GLADIS DE JESÚS LONDOÑO PINEDA.
- Que es inválido, calificado con una pérdida de capacidad laboral del 53.55%, con fecha de estructuración del 4 de febrero de 2009.
- Que su padre JOSÉ SITDALÍ NAVAS VELÁSQUEZ falleció el 26 de septiembre de 1995, dejando acreditados los requisitos para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes, por lo que el ISS a través de la resolución No. 00920 de 2011 le reconoció tal prestación en calidad de hijo menor en un 50% y el otro 50% para su madre GLADIS DE JESÚS LONDOÑO.
- Que desde muy temprana edad sufrió diferentes problemas de salud, lo que le dificultó ser un niño normal de su edad. Incluso en el colegio no lograba avanzar, pues tenía problemas de aprendizaje, adicional a todos los problemas de salud que padece y problemas mentales que heredó de su madre.
- Que es una persona inválida y siempre dependió económicamente de su padre, al este fallecer continuó dependiendo de la pensión que había causado, y posteriormente comenzó ya a depender de la pensión de la pensión de sobrevivientes que recibía su madre.
- Que el 2 de junio de 2020 falleció su madre, quien la persona que recibía la pensión de su padre, por lo que quedó desamparado, ya que no cuenta con ingreso alguno y dependía económicamente de su padre y por consiguiente de la pensión de su madre, además de que no tiene ningún familiar que le pueda proporcionar ayuda económica y por su discapacidad no lo aceptan en ningún trabajo.
- Que ante el fallecimiento de su madre, el 18 de julio de 2020 solicitó la pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada mediante resolución SUB 192191 del mismo año, con el argumento que como la fecha de estructuración de la invalidez era posterior a la del fallecimiento del titular del derecho, no se podía acreditar la dependencia económica.
- Que no reconocerle la pensión de sobrevivientes sería desatender la finalidad de la norma que es el *evitar que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección, por cuanto se busca impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento.*
- Que solo con tener en cuenta su pérdida de capacidad laboral se puede evidenciar que anteriormente se encontraba incapacitado para trabajar en razón a su edad y hoy en día está incapacitado para laborar física y mentalmente, ya que cuenta con un porcentaje de pérdida de

capacidad laboral superior al 50%, que le hace casi imposible incorporarse al mercado laboral, por lo que la falta de la pensión ocasionará que no pueda tener una vida digna, ya que carece de cualquier ingreso y también le impide acceder al sistema de salud.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtió **COLPENSIONES** el derecho pretendido e indicó frente a los hechos que acepta como cierto que el demandante es hijo del señor JOSÉ SITDALÍ NAVAS VELÁSQUEZ y GLADIS DE JESÚS LONDOÑO, la fecha de deceso de sus padres, la condición de inválido del actor, la fecha de estructuración que le fue determinada, el contenido de la Resolución que le reconoció la pensión de sobrevivientes en calidad de hijo menor y de la que le negó la pensión de sobrevivientes como hijo inválido. Respecto a los demás señala que no le constan o se trata de apreciaciones personales que serán objeto de debate probatorio.

1.4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Dentro del trámite de la **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**, llevada a cabo por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín el 21 de septiembre de 2021, se **ABSOLVIÓ** a **COLPENSIONES** de todas las pretensiones formuladas en su contra por el señor **CARLOS ARTURO NAVAS LONDOÑO**, a quien condenó en costas fijando las agencias en derecho en la suma de medio salario mínimo.

2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

2.1. ARGUMENTOS DEL JUEZ

Señaló que conforme al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, norma vigente la fecha de deceso del señor JOSÉ SITDALÍ NAVAS VELÁSQUEZ, en su literal c) estipula que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes los hijos menores de 18 años, los hijos mayores de 18 y hasta los 25 años incapacitados para laborar en razón de sus estudios y los hijos inválidos sí dependían económicamente del causante mientras subsistan las condiciones de invalidez y para determinar cuándo hay invalidez se aplica el artículo 38 de la misma norma. En el caso de autos está debidamente acreditado que el demandante es hijo del causante, quien falleció el 26 de septiembre

de 1995 y que raíz de dicho deceso el ISS reconoció pensión de sobrevivientes a la cónyuge GLADIS LONDOÑO PINEDA y al actor en proporción del 50% para cada uno.

Por tanto concluyó el a quo que si bien el señor CARLOS ARTURO NAVAS inicialmente resultó beneficiario de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su padre JOSÉ SITDALÍ NAVAS VELÁSQUEZ, por ser menor de edad, la cual disfrutó hasta el 22 de marzo de 2008, cuando arribó a la mayoría de edad, ahora no le asiste derecho a la prestación económica en calidad de hijo inválido, dado que cuando murió su padre en 1995, este era menor de edad, pero al arribar a la mayoría de edad el 22 de marzo de 2008, su madre GLADIS LONDOÑO PINEDA lo excluyó de ese orden de beneficiarios acreciendo el porcentaje que venía recibiendo por la pensión al 100%, es decir, que el actor perdió su derecho, dado que la condición de inválido la adquirió el 4 de febrero de 2009, con posterioridad al deceso de su progenitor ocurrido el 26 de septiembre de 1995, por lo que no puede aspirar a que la pensión en mención le sea reconocida por dicho estado, así haya acreditado en el proceso la dependencia económica de sus padres fallecidos, toda vez que no es posible que este sustituya la pensión de su madre, porque sería una sustitución de la sustitución, por lo que absolvió a la demandada de todas las pretensiones en su contra.

2.2. APELACIÓN DEMANDANTE

Adujo que en esta caso no se trata de una sustitución de la sustitución, pues el demandante como hijo está en el mismo nivel de la madre, entonces si una persona tiene un derecho y está en el mismo nivel de beneficiarios, realmente puede reclamar en cualquier momento y esa prestación puede ser compartida.

Indicó que si bien es cierto conforme a la ley no existe ningún derecho para el demandante, debe sopesarse derechos fundamentales, toda vez que el actor es una persona con una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y es una persona que nunca ha trabajado, que quedaría indefensa, porque en ese momento quien le colabora es su abuela, pero cuando esta fallezca, quedara indefensa. Insiste en que se está desconociendo que el fin de la pensión de sobrevivientes es proteger al grupo familiar y Carlos desde que su padre falleció recibió esa pensión hasta los 18 años y luego su madre lo sostenía con la misma pensión, además de que él es discapacitado desde 2009, poco después de cumplir la mayoría de edad, por lo que apelando a principios constitucionales solicita se reconozca la pensión de sobrevivientes.

2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

2.3.1. ALEGATOS DEMANDANTE

Manifiesta que el demandante desde niño presentó múltiples patologías que no le permitieron tener una vida normal en los ámbitos sociales, educativos y laborales, por ello siempre dependió económicamente de sus padres, hasta que ellos fallecieron, no obstante, cuando solicitó la calificación de pérdida de capacidad laboral de sus falencias y la fecha de estructuración de la misma, COLPENSIONES, ignoró que dichas patologías habían sido desarrolladas desde la niñez y por ende situó la fecha de estructuración posterior al fallecimiento de su padre quien fue el titular del derecho pensional que hoy se reclama.

Insiste en que negar las pretensiones al señor CARLOS ARTURO NAVAS LONDOÑO sería atentar contra sus derechos fundamentales y contra la protección especial que le deben proporcionar a las personas discapacitadas de acuerdo a los parámetros constitucionales, toda vez que el demandante no cuenta con otro tipo de ingresos y que con la muerte de sus padres se ha visto en una situación de vulnerabilidad manifiesta que solo se podría remediar con el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la que tiene derecho por ser hijo discapacitado. No solo por el objeto económico de la misma prestación, sino porque además quedara cubierto a través de la afiliación efectiva al régimen en salud para poder seguir sus tratamientos y tener el acceso a un servicio de salud de calidad tal cual como el lo necesita.

2.3.2. ALEGATOS COLPENSIONES

Solicita que se confirme el fallo de primera instancia, pues conforme a la prueba recaudada quedó claro que, la madre del demandante ostentaba una sustitución pensional reconocida en virtud de la muerte de su cónyuge y padre del actor, señor NAVAS VELÁSQUEZ. Siendo entonces lo solicitado por el señor CARLOS ARTURO NAVAS LONDOÑO una pensión de sobrevivientes de una sustitución pensional; lo anterior, fundamentado en su condición de hijo inválido, toda vez que el mismo se encuentra calificado con una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, deficiencia originada con posterioridad al fallecimiento de su padre y al cumplimiento de su mayoría de edad, y por presuntamente depender de su madre para su sustento económico. Motivos por los cuales se tiene que COLPENSIONES ha actuado conforme a derecho y no le asiste obligación de reconocer pensión de sobreviviente al demandante conforme a la normatividad y jurisprudencia vigente.

Así las cosas, actualmente no existe obligación de COLPENSIONES de reconocer la pensión solicitada por la parte demandante, toda vez que, analizados los presupuestos establecidos para la sustitución pensional en calidad de hijo inválido se concluye la responsabilidad del actor de demostrar las circunstancias de hecho y de derecho que lleven a la conclusión, sin lugar a dudas, de la efectiva dependencia con el causante, pues, como ya se dijo, no solo la fecha de estructuración es posterior al deceso de este, sino también que, aun cumpliendo la mayoría de edad, el señor NAVAS LONDOÑO, en 12 años nunca adelantó un trámite relativo al reconocimiento de tal prestación, motivo por el cual debe comprobarse los hechos afirmados, toda vez que COLPENSIONES es una entidad de derecho público, la cual debe someterse a lo regulado en la legislación.

Agrega que toda vez el señor CARLOS ARTURO NAVAS LONDOÑO fue calificado a través de dictamen No. 37995 del 15 de septiembre de 2001, emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez en el cual se le otorgó una pérdida de la capacidad laboral del 53.55% estructurada el 04 de febrero de 2009; es decir, con posterioridad al cumplimiento de la mayoría de edad y de la fecha de deceso de su padre. En este sentido, no tendría derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con respecto a la muerte del señor JOSÉ SITDALI NAVAS VELÁSQUEZ. Ahora bien, conforme a los hechos y pretensiones de la demanda, se evidencia que también se solicita el reconocimiento del derecho pensional en virtud de la muerte de su madre, señora GLADIS DE JESÚS LONDOÑO PINEDA, en este punto es preciso afirmar que es el afiliado al sistema o la persona pensionada por vejez o invalidez quien puede dejar causada la pensión de sobreviviente conforme a la legislación actual y a la que regía para la fecha del deceso del causante, no siendo este el caso que nos ocupa pues la señora LONDOÑO PINEDA no ostentaba dichas calidades, no pudiendo por tanto dejar causada una pensión de sobrevivientes a su hijo, el aquí demandante.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Consiste en determinar si el demandante acreditó los requisitos para obtener la sustitución pensional por el fallecimiento de su padre.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En primer lugar, debe aclararse que la normatividad aplicable al presente caso respecto a la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento del fallecimiento del señor JOSÉ SITDALÍ NAVAS

VELÁSQUEZ, padre del demandante, el cual ocurrió el 26 de septiembre de 1995, es decir, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, antes de la modificación de la Ley 797 de 2003 que en su literal b), en lo que interesa al proceso, establecía:

“Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

(...)

b.) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez.

En el caso de autos, se encuentra acreditado que el ISS a través de Resolución No. 000920 de 2011 reconoció la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del señor JOSÉ SITDALÍ NAVAS VELÁSQUEZ, a la señora GLADIS DEL SOCORRO LONDOÑO PINEDA en calidad de cónyuge en un 100% y un pago único a favor de CARLOS ARTURO NAVAS LONDOÑO en calidad de hijo menor de edad por las mesadas causadas entre el 4 de julio de 2003 y el 22 de marzo de 2008, fecha de cumplimiento de la mayoría de edad.

Por lo que no existe discusión frente a la calidad de hijo que tenía el demandante respecto al causante, ya que inicialmente le fue reconocida la prestación por tener la condición de menor de edad a la fecha del deceso de su padre, la cual se le pagó hasta el 22 de marzo de 2008, data en que arribó a los 18 años de edad y perdió su condición de beneficiario por no haber acreditado estudios.

Ahora, solicita el señor CARLOS ARTURO NAVAS LONDOÑO, después de que su derecho se extinguió, que se reconozca la prestación en condición de hijo inválido, para lo cual debía entonces acreditar que tenía dicha condición al momento del deceso de su padre y que dependía económicamente de este para ese momento.

Respecto al requisito de la invalidez, a folios 18/23 del plenario obra dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVÁLIDEZ DE ANTIOQUIA, donde se le determinó una pérdida de capacidad laboral del 53.55% estructurada el 4 de febrero de 2009, dictamen que quedó en firme tras no ser cuestionado.

Lo que significa que la invalidez del demandante se estructuró en fecha posterior al deceso de su padre ocurrido el 26 de septiembre de 1995, por lo que para el deceso de este no tenía la calidad de inválido, situación que tampoco ocurrió mientras tenía la condición de beneficiario en razón a su minoría de edad.

A través del presente proceso se pretendía que se reconociera la prestación, aduciendo que el señor CARLOS ARTURO NAVAS siempre dependió económicamente de su padre y posteriormente de su madre GLADIS LONDOÑO con la pensión que esa recibía de su padre, indicando en los alegatos que el actor desde niño padeció la enfermedad que le causó la pérdida de capacidad laboral, pero sin atacar, propiamente, el Dictamen ni la fecha de estructuración que le fue determinada.

El artículo 3º del Decreto 917 de 1999, norma vigente para la fecha en que se realizó el aludido dictamen, definía la fecha de estructuración como la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Dicha norma fue derogada por el Decreto 1507 de 2014, que estableció el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional y definió la fecha de estructuración como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado.

Por su parte, el **ARTÍCULO 41 de la Ley 100 de 1993** modificado por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012, señala que: *“Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales- ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales.”*

En éste sentido se destaca la importancia que tienen dichos conceptos, dado que éstos en principio constituyen el fundamento para que las entidades que administran el Sistema de Seguridad Social decidan sobre el reconocimiento y pago de determinadas prestaciones económicas a las que podría tener derecho el afiliado, sin que sea admisible, sin fundamento alguno, apartarse de su contenido, incluso un juez no estaría facultado para dictaminar en forma definitiva y **sin el apoyo de especialistas en la materia**, asuntos tan técnicos como la distribución porcentual que apareja una patología o la fecha de estructuración de la invalidez, toda vez que es un hecho que debe ser establecido científicamente, conocimiento que claramente escapa al resorte de las competencias de un operador jurídico.

Por consiguiente, es claro que cuando se presente inconformidad contra los dictámenes emitidos por las Administradoras de Fondo de Pensiones, las ARL o las Juntas de Calificación de Invalidez se pueden controvertir ante la justicia ordinaria, donde a través de una prueba pericial se puede establecer si efectivamente hay lugar a la modificación de los mismos.

Sin embargo, dentro del presente asunto, la parte actora no controvertió en su momento el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez para que fuera revisado por la Junta Nacional y dentro de la presente demanda, ni siquiera se incluyó dentro de las pretensiones la de modificar la fecha de estructuración o controvertir el aludido dictamen, ni se allegó prueba alguna que permitiera al juez llegar a esta conclusión, pues no se aportó un dictamen o concepto de un médico especialista en la materia, ni tampoco se solicitó que fuera decretada prueba pericial con dicho fin.

Por tanto, en esta instancia, no es dable apartarse del dictamen, como lo sugiere el apoderado de la parte actora en sus alegatos, pues no se cuenta con los elementos técnicos para desechar las conclusiones dadas por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, pues no es de resorte del operador jurídico examinar asuntos tan técnicos como este, precisamente se vale de especialistas en la materia para efectos de esclarecer los hechos objetos de controversia. Así lo consagra la ley estatutaria de administración de justicia, Ley 270 de 1996, cuando se refiere a la conformación de las listas de auxiliares como apoyo a los falladores dados sus conocimientos técnicos y científicos, con medios idóneos para la calificación a partir de un grupo interdisciplinario, de ahí que las juntas de calificación no sean las únicas facultadas para emitir dictámenes válidos al interior de un proceso judicial, ni se espere del fallador un análisis médico.

En consecuencia, al no obrar ninguna prueba técnica que permita concluir que la fecha de estructuración que se le determinó al señor NAVAS LONDOÑO no era la que le fue establecida por la Junta Regional de Calificación, esta Magistratura no cuenta con elementos para desconocer el concepto técnico, no siendo posible determinar una diferente, como lo pretende el apoderado de la parte actora, pues se insiste, el juez no tiene los conocimientos técnicos para ello, ya que a pesar de que en plenario reposa la historia clínica del demandante que da cuenta de sus padecimientos, no es posible establecer cuando sus patologías generaron en él una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Aunado a lo anterior, la variación de la fecha de estructuración de la invalidez del actor, no fue una pretensión de la demanda, pues en la misma nunca se pretendió controvertir el Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral emitido por la Junta de Calificación de Invalidez, razón por la cual la prueba no iba dirigida a tal fin y por tanto, como ya se analizó, no se

cuentan con los elementos técnicos para apartarse de la fecha de estructuración determinada por la entidad competente.

Ahora, tampoco es válido el argumento del apoderado del actor que debe atenderse a principios de índole constitucional porque se trata de una persona inválida, pues si bien la Sala no es ajena a dichos principios, que propenden por una protección especial a las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad por padecer de algún grado de discapacidad física o sensorial, sin embargo, para es claro que la aplicación de dichos principios debe estar siempre de la mano de la observancia del ordenamiento jurídico, pues no pueden invocarse los mismos para dejar de aplicar las normas al caso concreto.

Por consiguiente, es claro que tal y como lo estimó el a quo, al haberse determinado que la invalidez del señor CARLOS ARTURO NAVAS LONDOÑO se estructuró el 4 de febrero de 2009, es decir, con posterioridad al fallecimiento de su padre JOSÉ SITDALÍ NAVAS VELÁSQUEZ, ocurrido el 26 de septiembre de 1995, e incluso después de que se hubiere extinguido su condición de beneficiario que le había sido otorgada como hijo menor de edad, resulta evidente que no acredita los requisitos para beneficiarse de la pensión de sobrevivientes en los términos del literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, ya que no tenía la condición de inválido para la muerte del causante, sin que se haga necesario analizar entonces el requisito de la dependencia económica, la que por demás se presume, dado que para la fecha de deceso de su padre tenía 5 años de edad.

En consecuencia, deberá CONFIRMARSE la decisión de primera instancia de absolver a la demandada de todas las pretensiones en su contra.

Costas en esta instancia a cargo del demandante por no haber tenido éxito en el recurso. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$50.000.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

DECIDE

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida el 21 de septiembre de 2021 por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario promovido por **CARLOS ARTURO**

NAVAS LONDOÑO identificado con c.c. **1.017.178.774** contra **COLPENSIONES**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo del demandante por no haber tenido éxito en el recurso. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$50.000.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día

Los magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante: **CARLOS ARTURO NAVAS LONDOÑO**
Demandado: **COLPENSIONES**
Radicado No.: **05001-31-05-009-2020-00441-01.**
Decisión: **CONFIRMA ABSOLUCIÓN**
Fecha de la sentencia: **16/06/2022**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 17/06/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario